

ADMINISTRACION JENERAL.

CALLE DE BUENOS-AYRES NÚM. 207.

Este Diario se publica por la IMPRENTA DE SU NOMBRE, establecida en la calle de Buenos-Ayres número 207.—La suscripción DOS PATACONES al mes y TRES PESOS para la Villa de la Union. La suscripción se PAGA ADELANTADA en ambas partes.

EL ORDEN

AGENCIAS DE ESTE DIARIO.

Se reciben suscripciones en su administración, en la Librería Nueva calle de 25 de mayo núm. 202, en la Librería Argentina del Sr. Ibarra calle de las Cámaras núm. 92 y en la Librería de la casa Ilosa Bourret y Ca., de París, calle del 25 de Mayo núm. 250 y 252. Los avisos solo se reciben en su oficina calle de Buenos Ayres núm. 207.

ÓRGANO DE LA POLÍTICA, COMERCIO Y LITERATURA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL.

ULTIMAS FECHAS.

EUROPA.	AMERICA.
LONDRES. 9 febrero.	NEW-YORK. 4 febrero.
PARIS. 8 id.	BOSTON. 1 id.
BRUXELAS. 7 id.	HAMBURG. 13 id.
VIENNA. 6 id.	VALPARAISO. 8 febrero.
LIJPSIA. 5 id.	RIO JANEIRO. 15 marzo.
BERLIN. 4 id.	RIO GRANDE. 5 id.
AVIGNON. 3 id.	BUENOS-AYRES. 17 abril.

ALMANAQUE.

Hoy 20.—Santa Inés mártir y San José.
El sol sale a las 6 y 21 se pone a las 5 y 39.

CORREOS PARA EL INTERIOR.

Salen el 11 y 16 de cada mes, regresan el 13 y 31. Las cartas se reciben en la administración de Correos hasta la oración del día anterior a su salida.

INTERIOR.

Junta de Crédito público.

Exmo. Sr.

La Junta de Crédito Público habiendo liquidado todos los créditos de deuda contra el Estado que tenía a su cargo, y cuantos le han sido presentados hasta la presente fecha, ha creído conveniente no aplazar por más tiempo la presentación de sus trabajos, sin embargo de que aun pueden existir algunos otros que deban ser sujetos a su examen y liquidación, lo que no le ha parecido motivo suficiente para que el importante asunto del arreglo de la deuda pública quedase dependiente de la definitiva y completa liquidación de las restantes reclamaciones; sobre todo ahora que funcionando el cuerpo legislativo se ha re-puesto el país bajo el régimen legal.

Instituida por el art. 11 de la convención de 12 de octubre de 1851 entre la República y el Imperio del Brasil, la Junta de Crédito Público empezó a funcionar el 15 de setiembre de 1852 con el reglamento de 9 del mismo mes, que para su régimen interior fué aprobado por el gobierno.

Desde entonces ella se ha contraído asiduamente al examen, liquidación y clasificación de los diversos créditos de la deuda, y sin enumerar aquí las dificultades prácticas que se han presentado en el transcurso de su ejercicio en detrimento de la pronta conclusión de su tarea, por que esas dificultades han sido sometidas oportunamente a la resolución del superior gobierno en varias épocas y oficios de esta Junta, sea solicitando la alteración de su reglamento, o bien provocando medidas conducentes a remover las trabas supervinientes; se contraerá tan solo hoy a espli-car en resumen el resultado de sus trabajos.

La Junta se permitirá solamente recordar que señalando el art. 9 de su reglamento el término de cuatro meses, que fenecía el 31 de diciembre de 1852, para servir presentados todos los créditos contra el Estado, y habiéndose reconocido la insuficiencia de ese término, fué prorrogado por un mes mas, y aun después por el decreto de 29 de agosto de 1853, se volvió a abrir un nuevo plazo hasta el fin de octubre del mismo año, no entendiéndose la prescripción allí impuesta con aquellas deudas que estuviesen corriendo trámites al espirar dicho plazo.

En virtud pues de esta disposición, la Junta ha recibido y liquidado todos los créditos que le han sido presentados hasta ahora con las condiciones de aquel decreto, y cree haberse obtenido con esta medida la presentación de casi todos los títulos de deuda anteriores a 1852, con esclusión de muy insignificante suma de algunos pocos que todavía están en trámites (que mas tarde pueden ser recibidos) y de aquellas reclamaciones aun no justificadas ni reconocidas, por ganados y otros haberes subministrados en la campaña, para cuya solución se habia promulgado la lei de 25 de julio del año pasado que hasta hoy no ha tenido ejecución, irrogándose de ahí notable desventaja para esta clase de acreedores del Estado, que, al parecer de la Junta, tienen indisputable derecho de ser reconocidos y considerados en cualquier operación que arregle la suerte de los demas acreedores de la nación.

De 16,302 títulos se compone la deuda que ha sido hasta la presente fecha liquidada por la Junta, los cuales a escepcion de los 56 primeros han sido todos numerados, y es bajo esos números que han sido inscritos en el libro de registro de la deuda que lleva la Junta. De aquellos títulos, unos han sido acompañados de voluminosos expedientes presentados por los mismos acreedores; que han sido todos examinados; otros han exigido la consulta de sus antecedentes existentes en la contaduría general, y en poder del ex-directorio de Hacienda, de donde han sido recojidos a instancia de la Junta y esto ha ocasionado una revisión de mas de treinta mil documentos. Entretanto, esa consulta y revisión le era imprescindible, desde que por el reglamento se habia cometido a la Junta examinar el origen de los créditos y clasificarlos.

La falta de números en los primeros 56

documentos liquidados proviene de no haber adoptado la Junta el sistema de numerarlos, sino dias después de empezada la liquidación, y cuando ya aquellos créditos después de liquidados, habian sido entregados a sus tenedores.

En el acto de recojer esos títulos, cuando se trate de la consolidación de la deuda, podrá ponerse los números respectivos, y que se encuentren espresados en el libro de registro.

Representan aquellos 16,302 títulos de deuda la suma total de 47,591,931 pesos 485 cent. procedentes de las diversas clases espresadas en el mapa adjunto, de cuyo origen tuvo que ocuparse la Junta con arreglo a su reglamento. De aquel monto representa el capital primitivo de las transacciones que han originado la deuda 30,832,585 pesos 425 cent.; 12,727,935 pesos, 010 cent. sus intereses liquidados hasta fin de 1852 época a que llega la liquidación, y 4,031,411 pesos, 020 cent. las ganancias que por los convenios entre el gobierno y sus acreedores se ha acordado a esas transacciones, lo que por totalidades de clases se demuestra tambien en el espresado mapa, existiendo igualmente esa misma distinción, en el libro de registro, respecto a cada uno de los créditos liquidados.

El el citado monto de 47,591,931 \$ 485 centésimos se halla incluida la suma de 745, 121 \$ 365 centésimos a que asciende lo que adeuda el Estado hasta 31 de Diciembre de 1852 a la sociedad administradora de la cuarta parte de rentas de aduana del año 1818, clasificada bajo el título *Empréstito*, y se compone del capital primitivo de 300,000 pesos, precio por el cual dicha sociedad habia comprado dicha cuarta parte de aquella renta, y 445,121 \$ 365 cent. de interés al 2 p. % y de resto de la indemnización que le fué acordada por el no cumplimiento del contrato originario; habiendo ya dicha sociedad recibido a cuenta en efectivo la suma de 163,776 \$ 525 cent.

Tambien está comprendida en el referido monto la suma de 276,651 \$ 460 cent. bajo el título *Suministros* por los gastos que la escuadra de S. M. B. hizo en los años 1816 y 1817, de cuenta de la República con diversos artículos alimenticios y otros que por varias veces suplió en diferentes puntos.

En el modo de clasificar la deuda y en la distinta separación de los capitales, intereses y usuras de que ella se compone, fundó la junta un trabajo que a insinuación del gobierno se vió en la necesidad de presentar el 4 de mayo del año pasado. No hesitará la junta un momento en reconocer y confesar que sus ideas fueron entonces mal aconsejadas por muchos acreedores, para quienes era antipática cualquier rebaja en la deuda liquidada, y repugnante toda clasificación que estableciese categorías de preferencia entre los acreedores del Estado.

No se hizo la junta una ilusión cuando proponia semejantes ideas, porque ya entonces en su posición deploraba no poder proponer la consolidación de toda la deuda de la República, sin rebaja ninguna de las sumas liquidadas, y sin recurrir a clasificaciones que por mas plausibles que sean en presencia de las circunstancias por las cuales ha pasado, y las en que se encuentra el país, no pueden dejar de suscitar quejas y reclamaciones que la junta profundamente lamenta pero a una fin importante subordinada, a pesar suyo, todos los sentimientos que la razón y la justicia le podrian inspirar y ese fué que la operación propuesta por ella, fué se una realidad para los acreedores y una posibilidad para el Estado.

Y aunque hoy el fin que se propone la junta no puede menos que ser el mismo, ha buscado sin embargo conciliar todos esos intereses de los acreedores en la elección de los medios que tiene el honor de sujetar a la esclarecida consideración del Gobierno, para el arreglo de la deuda, con los intereses, la buena fé, y los probables recursos del Estado, y cree que habrá conseguido ese doble fin con el proyecto adjunto.

La consolidación de la deuda es, y no puede menos de serlo, la base orgánica del proyecto de la junta. Cualquier otra medida fuera una injustificable violación de espresos compromisos internacionales, que, además de inconveniente para el Estado, seria menos ventajosa para los acreedores. La junta ya lo habia dicho y se permite repetirlo.

La existencia de una deuda regular del Estado, convenientemente consolidada, es un lazo íntimo entre gobernantes y gobernados, que asocia y vincula el interés de muchos al interés del país, que establece un elemento de orden, y que ha co de cada acreedor otros tantos sostenedores de las instituciones, de la seguridad y de la prosperidad pública.

Sin detenerse pues, en mas consideraciones respecto de una cuestión, sobre cuya preferencia la practica adoptada por las naciones ha dado ya su fallo definitivo, la

junta pasará a tratar del proyecto que ha elaborado.

Montada la deuda hasta ahora conocida y liquidada por la junta a la suma de 47,591,931 \$ 485 cent. y suponiendo que la existencia en trámites completo la suma de 48 millones de pesos, resta aun por conocer y liquidar la que puede provenir de las reclamaciones de la campaña, que la junta no tiene datos seguros para valorar con exactitud; pero que por un cálculo aproximado se permite estimar, a lo mas en 12 millones de pesos, lo que hará ascender el monto total de la deuda interna de la República a la importante suma de 60 millones de pesos.

Ademas de esta suma existe la deuda externa; es decir, la procedente de los subsidios pecuniarios que los gobiernos de Francia y del Brasil han hecho a la República.

El subsidio francés que empezó por 10,000 \$ mensuales, se redujo después a 28,000 y fué suspenso en agosto de 1851, montada a la suma de 1,272,000 \$ y habiéndose amortizado con la renta de aduana la cantidad de 154,601 \$ 605 centésimos se resta de consiguiente la suma de 1,117,395 \$ 195 cent. que continua como hasta ahora, a ser mensualmente amortizada con parte del producto de aquella renta.

El subsidio brasileiro de 72,000 \$ mensuales, estipulado por la convención celebrada entre el imperio y esta República en 12 de octubre de 1851, monta con lo recibido hasta la presente fecha a la suma de 1,383,019 \$ 160 cent. suma esta que tendrá que subir a mayor monto con la continuación de este auxilio del imperio.

En vista pues de este estado comparado con lo que prometen los recaros actuales y mas próximos del país, conoció la Junta que el arreglo de la deuda interna de la República no podia dejar de subordinarse a algunas restricciones en favor del Estado, a fin de que siendo un acto posible a sus medios, pudiera ser una operación aprovechable y segura para los acreedores.

Reconociéndose pues todo el monto de la deuda liquidada por la Junta, y en sus aumentos acordados y los intereses hasta fin de 1852, sin rebaja ni esclusión ninguna, reconocidos tambien a todos los acreedores en el mismo pió de igualdad sin establecer preferencias que no pueden menos de ser injustas, desde que todos son considerados como legítimos acreedores del Estado; acordándose a los títulos representativos de esa deuda el mayor interés que es posible conferirles, de modo que no se malogre la realidad de una operación en que debe basarse el crédito público del país, parece que se ha atendido con buena fé y lealtad a la posible solución de este compromiso nacional.

Acordar el interes de 6 p. % al año a una deuda de cerca de 60 millones fuera, ademas de abusar del buen sentido, y rebajar la altura en que debe ser tratado asunto tan grave, seria tocar el absurdo si no el ridículo.

El interes de 3 p. % pues, al mismo tiempo que el máximo que el Estado con esfuerzo podrá conceder, ha parecido a la junta una retribución equitativa para una deuda reconocida y legitimada con todas las ganancias que en grande parte contiene, y con sus enormes intereses liquidados hasta fin de 1852.—Sin embargo, ese interes de 3 p. % dejaría aun de ser una posibilidad para la República, y de consiguiente una realidad para los acreedores, si se pretendiese pagarlo desde ahora e íntegramente de todo el monto a que asciende la deuda. La inanicion de las rentas públicas vendría a protestar contra esa liberalidad imprudente y falaz, que anonadaria al nacer el arreglo de la deuda, haciéndolo una quimera.

Es por eso que la junta echó mano del arbitrio de dividir la deuda en tres partes iguales para dar el goce de aquel interes, a la primera parte desde el principio de 1855 en adelante; a la segunda parte de 1858 en adelante, y a la tercera parte a empezar desde 1861.

Por este medio el país, a medida que va ya reponiéndose de su mal estar, y de los sacudimientos que ha sufrido, ira cargando un gravamen proporcional a sus fuerzas, haciéndose el Estado un deber de desempeñar el compromiso de honor que contrae tan luego como lo permitan sus circunstancias, si ellas mejorasen aun antes de los plazos trienales en que se ha establecido la fruición del interes. Tales son las doctrinas de los primeros cuatro artículos del proyecto.

El art. 5.º tiene por objeto reducir a la mitad el capital nominal de la deuda, y para invitar a los acreedores a concurrir a este fin era preciso crearles un estímulo; así que por el art. 8.º se aplica a la amortización de las pólizas del 6 p. % que representan esa reducción, una suma mayor que la destinada a las del 3 p. %, y por el art. 9.º se le confiere una indemnización tambien mayor que la acordada a estas; lo que dará a las pólizas de 6 p. % mas estimación y crédito, y de consiguiente mas grande cotación y demanda en el mercado.

De otra suerte no es creíble que los acreedores reduzcan a la mitad sus capitales, sin una compensación que los indemnice de esa pérdida gratuita y manifiesta; mientras que por la antelación desde luego en el rescate, y por la ventaja mas tardía, en la indemnización, el mayor valor que obtendrán los títulos de 6 p. % hará que los acreedores no vacilen un momento en preferir los a los de 3 p. %.

La reducción del capital nominal de la deuda es de utilidad íntima; la rehabilitación del crédito público encontraria en esa medida reconocidas ventajas, que seria ocioso enumerar: era pues conveniente, sin hacerla obligatoria, ofrecerla a los acreedores como una transacción lucrativa.

El art. 6.º ha parecido indispensable a la Junta, no solamente para uniformar los títulos de la deuda restringiéndolos a los valores necesarios a solventarla, sino para proveer sobre el modo práctico de la conversión de las deudas, o restos de ellas, que no alcanzasen al valor mínimo de una póliza. Era una dificultad que tocara la ejecución del proyecto, y que convenia allanar.

Por el artículo 7.º se establece el fondo amortizante que debe ser aplicado a la reducción de la deuda.

El 1 p. % real del capital nominal de la deuda, y los intereses de las pólizas amortizadas es lo que se acostumbra generalmente aplicar cada año a la amortización. Quisiera la junta adoptar esa misma base, pero la escasez de los recursos nacionales no le ha permitido realizar su pensamiento 475,919 \$ seria necesario destinar anualmente a la amortización de la deuda ya liquidada, sin contar con lo que resulta de las reclamaciones de la campaña, y esa suma con la exigida para el pago de los intereses, no cabe en las débiles fuerzas de la República soportar desde luego.

Suponiendo que la deuda total suba a 60 millones, seria preciso destinar en los primeros 3 años 600,000 \$ para la amortización e igual suma para los intereses; es decir 1,200,000 \$; en el 2.º trenio 1,800,000 \$, y del 3.º en adelante dos millones 400,000 \$. La simple enumeración de estas cantidades importa la prueba plena de que no es posible dotar a la amortización conforme a los estilos de operaciones semejantes.

Es una verdad práctica, harto repetida, que la república no puede en estos mas próximos años ser recargada de impuestos; porque efectivamente muy poca es la materia imponible que le existe, y que puede soportar gravamen. En esta situación difícil, en presencia de compromisos sagrados que llenar, ha creído la junta que una deducción de un décimo del monto de los intereses de las pólizas existentes en circulación, a pesar de ser un tributo que disminuye el *quantum* de intereses acordado a los títulos de la deuda, seria sin embargo bien recibida por los acreedores, no solamente porque esa insignificante deducción forma una suma importante para dar crédito y aumentar el valor de esos mismos títulos, sino porque ella es despesa ventajosamente indemnizada, aun en mérito de dichos títulos.

Este pensamiento inspirado por el deseo de hacer un acto práctico, posible y permanente del arreglo de la deuda encontrara en el buen sentido de los acreedores, tolerancia y aceptación. Si es sacrificio resulta todo en beneficio propio.

Los intereses de las pólizas amortizadas es otro producto que debe tambien formar el fondo amortizante, como generalmente se practica, y de lo que no es posible prescindir.

Una contribución o rebaja de la décima parte de los sueldos, de que no resulta menos de 25 pesos mensuales al estipendiario, es otro producto aplicable al mismo fin.

La Junta no ha trepidado un momento en proponer este arbitrio, a pesar de la impopularidad que él le puede acarrear. Está en los verdaderos intereses de los estipendiarios del Estado preferir el pago seguro de sus haberes con una ligera reducción en ellos, a ver figurar sus nombres en el presupuesto con un sueldo bien que mayor, nominal e impago por el déficit del Tesoro; es preferible ceder al Estado una diminuta parte que revierte en beneficio del crédito del país, a sacrificar mucho mas a la ganancia del usurario que especula sobre la necesidad de todos. Ademas, es preciso confesar que en general los sueldos de los empleados de la República no son mequinos; así sean bien pagos, que no carecen de liberalidad.

Sin embargo de esta convicción la Junta propone este recurso, por el corto periodo de tres años únicamente, como la época mas crítica de la convalecencia del país, y en la cual todos sus hijos deben a patria hacer un holocausto de patriotismo ante el santuario Nacional.

Solamente después de este periodo debe el tesoro contribuir anualmente a la suma de cien mil pesos, equivalente al producto en que la Junta estima aquella contribución sobre los sueldos, visto que

por el presupuesto de 1851 los sueldos mayores de 300 pesos en que puede recaer la deducción de un décimo, asciendo a cerca de 1,100,000 \$ lo que será a penas un sexto por ciento del capital nominal en que la Junta valora la deuda interna de la República. La aplicación constante de esta suma, de combinación con las demas, a pesar de su insignificante, es sorprendente en sus resultados amortizantes.

Finalmente al mismo fondo se facultan, cualesquiera sobrantes que resulten en lo venidero de los gastos anuales del Estado, u otras sumas con que la prevision del cuerpo legislativo, provea a la estension de la deuda.

Aplicado este fondo amortizante al rescate de la deuda, y ratiocinando que el valor de las pólizas en plaza será subordinado al interés corriente del dinero, y al crédito que vayan adquiriendo esos títulos, por la puntualidad en el pago de sus dividendos, se puede establecer como primer precio el de 50 p. %, y que en los primeros diez años tengan el aumento anual de 1 p. %—en los cinco siguientes el 2 p. % anuales, y así en adelante hasta llegar a la par, precio máximo porque el Estado puede rescatar sus títulos.

En este concepto la Junta ha organizado la demostración que acompaña de la amortización gradual de la deuda con arreglo al proyecto, calculándola en la suma de 60,000,000 de pesos, a que sin embargo no es probable que suba; y suponiendo que los términos medios de los precios de la amortización sean en los primeros diez años que corren de 1855 a 1865 de 60 p. %; de 1865 a 1870 de 70 p. %; de 1870 a 1875 de 80 p. %; de 1875 a 1880 de 90 p. % y de ahí en adelante a la par; resulta que en 1870 se habrá rescatado la tercera parte de la deuda, lo que importa desde entonces la ventaja de la cesación del descuento del 1 p. % de los intereses de las pólizas circulantes, y el abono, como indemnización de ese descuento, de mas de 1 p. % de los intereses, lo que equivale a 1 p. % mas de interes para los títulos de 6 p. %, que empezarán a recibir el 7 p. %, y finalmente que en abril de 1886 estará estinguida la deuda; es decir que en 32 1/2 años y estarán rescatados sesenta millones de pesos.

Y 32 1/2 años y en la vida de las naciones, y sobre todo de una nación aun en la cuna, es punto imperceptible en el espacio.

La amortización rigurosamente practicada, sobre todo en los primeros años, debe importar considerables ventajas, y en esa convicción la junta instantemente la aconseja.

El art. 8.º es la disposición ejecutoria de los artículos 3.º y 5.º de acuerdo con la práctica seguida en esta clase de operaciones.

Cuanto al art. 9.º de su simple enunciación resalta la intención con que fué redactado.—Aliviar a los acreedores de un gravamen, que aunque en beneficio ulterior de los títulos que poseen, no deja de ser una pérdida para ellos, e indemnizarlos tan luego como sea posible con una ventaja que al mismo tiempo que es una compensación equitativa del capital, y del tiempo perdido, sea un incentivo para la conversión de la deuda en títulos de seis por ciento, tal es el blanco que se propuso la junta con la doctrina de este artículo.

El artículo 10.º es el medio práctico de realizar el pensamiento del art. anterior sin recargar al tesoro con el gasto, que de otro modo pesaría sobre los colores públicos, lo que quizá imposibilitase o dificultase su cumplimiento. Y si es cierto que el monto entonces distraído por el pago del interes adicional del artículo 9.º hace falta a la amortización de la deuda, es tambien evidente que eso sucede cuando ya el producto de los intereses de los títulos rescatados forma una suma capaz de soportar ese desfase, y de equilibrarse en dos o tres años, siendo la prueba que sin embargo del desvio preciente de ese interes adicional, y del mayor precio porque en esa misma época se considera la amortización (en atención a que los títulos dejandolos entonces de sufrir un descuento, y al contrario teniendo una indemnización que aumente sus réditos ganan *ipso facto*, y desde luego mayor valor) aun así la amortización toma pronto su escala ascendente, y la deuda está estinguida en 1886.—La medida pues, mientras tiene poca influencia en el retardar del rescate, de la deuda, aprovecha mucho a los títulos representativos de crédito público.

El art. 11.º lo ha creído la junta indispensable para terminar una operación que de otro modo seria de larguísima duración; es ademas una doctrina generalmente admitida en la legislación fiscal de todos los países, conveniente y necesaria al cumplimiento de los actos administrativos.—Empero es preciso por otro lado que imponiéndose una prescripción, y después de un plazo improrrogable, el Estado facilite a sus acreedores dentro del término señalado todos los medios de evitar esa fiera.—De otro

